

LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO DE LA POLÍTICA. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN EN AMÉRICA LATINA¹

Silvia García Fajardo²

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que se ha ido reconociendo en el curso de las últimas tres décadas, producto de su inclusión en la agenda internacional. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (1993) la reconoce, por primera vez en la historia, como un asunto de violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres. Conforme se profundiza en su estudio se visibilizan manifestaciones de la violencia de género hacia las mujeres en todos los espacios sociales: en el doméstico, en la comunidad, en los ámbitos escolares, laborales y, recientemente, en las esferas de la política.

El objetivo de la ponencia es dar cuenta de las investigaciones que han abordado la violencia de género contra las mujeres en los espacios de la política institucionalizada como son los parlamentos y los gobiernos municipales en América Latina. Para lograrlo, el artículo se divide en tres apartados. En el primero, se hace referencia al marco conceptual sobre la violencia de género. En el segundo, se abordan los instrumentos internacionales más relevantes hacia la defensa de los derechos políticos de las mujeres en el espacio público. En el último, se exponen los estudios que han documentado la violencia de género en los órganos de representación política como en los parlamentos y gobiernos municipales.

Palabras clave: ideología patriarcal, violencia de género, acoso y violencia política, espacio político.

I. Marco conceptual sobre el género y la violencia de género

¹ Ponencia preparada para el XXXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales "Integridad y Equidad Electoral en América Latina", 11 al 14 de noviembre de 2014, San José, Costa Rica.

² Politóloga, Mtra. en Estudios de la Mujer y estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: sgfajd@yahoo.com.mx.

Existe amplio consenso en la literatura feminista que el orden social está regulado por las relaciones de género, entendidas estas como la formas de interacción y comportamientos entre hombres y mujeres en la vida cotidiana a partir de mandatos definidos culturalmente: las cuestiones de lo masculino y de lo femenino (Scott, 1999, Lamas, 1999, 2006, Sagato, 2003).

Joan Scott (1986), a partir de los planteamientos ¿cómo actúa el género en las relaciones sociales humanas? y ¿cómo da significado el género a las organizaciones y percepción del conocimiento histórico?, señala que la respuesta depende de cómo se conciba el género como una categoría de análisis (Scott, 1999: 41). Propone definirlo como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1999: 61).

La definición de Scott contribuye a ubicar el peso del género en el estudio de las relaciones sociales para indagar la manera en que se construye la subordinación y la jerarquización derivada de la diferencia sexual. Históricamente los sistemas sociales están definidos primariamente por la división de género, la cual remite inmediatamente a la dimensión del poder “No existe ningún sistema social sin esa división. El género es, pues, consustancial a la estructura de poder en todas sus formas” (Vianello y Caramazza: 2002:19).

Entonces, una sociedad que se funda en la división de género y transforma la diferencia sexual en desigualdades sociales forma parte de la estructura patriarcal de poder, como apunta Amorós:

Un sistema igualitario no produciría la marca de género. Esta es el signo de la pertenencia a un grupo social con determinadas características y funciones. La socialización de género tiende a inducir una identidad sexuada, determina un rango distinto para hombres y mujeres y prescribe un rol sexual (desde los gestos hasta las actividades sexuales y laborales, pasando por la moda, las diversiones etc.) (citada en Puleo, 1995:25).

La estructura patriarcal sustentada en la jerarquización y subordinación define la división sexual del trabajo, las identidades, los deseos, las formas de vida, por tanto, requiere de normas que lo sustenten. El sexismo es la fuente operacional para fijar posibilidades de vida, asignar conductas, determina actos de poder y el ejercicio de intereses, de ahí que construya dos géneros sexuales con prejuicios y se determinen jerarquías “uno mejor que lo otro y distinto de lo otro” (Izquierdo: 2001).

Rita Segato identifica a la estructura patriarcal como uno de los pilares en los que descansa la violencia contra las mujeres, porque establece marcos de inteligibilidad que le otorgan naturalización y legitimidad (Segato, 2003). Así la violencia contra las mujeres se instauró por la estructura binaria del patriarcado, al inscribirlas en el contrato sexual (Pateman, 1995) y excluirlas del contrato social.

Las feministas han criticado la “naturalidad” o determinismo biológico de la diferencia sexual para teorizarlas como hechos susceptibles de transformación (McDowell, 2000, Nicholson, 2003): los mecanismos culturales definirán qué es lo masculino y lo femenino en determinadas sociedades específicas y periodos históricos, así que no se puede hablar de la universalización del género sino de prácticas culturales específicas intersectadas con la clase, edad, etnia, preferencia política, entre otros.

En las sociedades actuales los seres humanos enfrentamos múltiples formas de violencia. La encontramos en distintas escalas (micro, meso, macro) y ámbitos (individuos, familias, grupos, instituciones, civilizaciones) que se manifiesta en las guerras y sus instituciones que la soportan, en la *economía*, en la *política* (exclusión de ciudadanos en la toma de decisiones) en la *ideología*, en la *familia*, en la *enseñanza* y en la *cultura* (etnocentrismo, racismo, xenofobia, discriminación de género, androcentrismo, consumismo) (Jiménez, 2012:18 cursivas del autor).

De tal manera que hay amplia coincidencia en que la violencia es una construcción social más que un hecho biológico innato (Jusidman, 2010; Jiménez, 2012) es decir, no se nace violento/a sino que la violencia es aprendida y transmitida consciente e

inconscientemente de generación en generación a través de mecanismos culturales, de ahí su carácter histórico.

De entre las múltiples expresiones de la violencia destaco la violencia de género porque es una forma particular y diferente a todas las demás, la especificidad radica en que se relaciona con los roles sociales de género, cuyas afectadas son principalmente las mujeres, “hay un orden social que beneficia a los hombres y privilegia lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino, que produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y esa forma de violencia fundada en todo ello y que por eso llamamos violencia de género” (Castro, 2012:26).

Según Sanmartín, la violencia de género se presenta cuando “se perpetra porque el agresor ataca a la mujer por el hecho de ser mujer y apartarse de lo que él considera el papel social que le corresponde” (Sanmartín, 2010:14). Esta visión remite al carácter relacional de la violencia que es explícita y reconocida.

Hace falta precisar el carácter el estructural. Para Breith (1993) la violencia de género “forma un solo cuerpo con las injusticias estructurales y alimenta la lógica imperante de una cultura violenta donde se nos trata de acostumbrar al dominio de unos a otros como forma natural de vida y sustento ideológico de una sociedad de subordinación” (Breith, 1993).

Podemos referir a dos tipos de violencia de género (Banchs 1996): la violencia explícita o reconocida que adquiere su visibilidad porque deja marcas sobre el cuerpo (los actos verbales y físicos entran en este tipo); la segunda es la violencia subterránea, difícil de percibir porque no se reconoce como tal, además de ser mitificada a través de su negación, ocultamiento o justificación, se apoya en el reparto desigual del poder, en el acceso y control de los recursos.

La estructura patriarcal es en sí misma violenta para las mujeres porque define las bases para la organización de la reproducción, la sexualidad, los comportamientos y las

normas ligadas al poder. Un rasgo común de las sociedades patriarcales es la existencia misma de la violencia género.

Estructuralmente, en el espacio de la política al estar *generizado* encontramos asimetrías de poder pues al ser una esfera históricamente masculinizada limita el acceso a la toma de decisiones de las mujeres mediante la discriminación. La discriminación, según Banchs es “la asignación de un trato desigual a los componentes de un género privilegiando los intereses, oportunidades y derechos del otro, podemos considerar que cualquier forma de discriminación hacia la mujer es, en sí misma, un hecho violento” (Banchs, 1996:16).

Las cifras sobre la presencia de las mujeres latinoamericanas en la esfera política en las posiciones de poder son uno de los indicadores de la discriminación y, por ende de la violencia vista en términos estructurales, lo cual se revisará en el apartado siguiente.

II. Instrumentos internacionales para la erradicación de la violencia en el espacio político

Diversos instrumentos internacionales comenzaron a visibilizar el problema de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Por razones de espacio se abordarán de manera sucinta los más importantes.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) creada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1979, considera como un principio básico la participación igualitaria de mujeres y hombres en la esfera pública.

La CEDAW señala diversos derechos políticos para las mujeres: votar y ser elegibles en los cargos de elección popular, participar en la formulación de políticas gubernamentales y su ejecución así como ejercer funciones públicas en todos los planos

gubernamentales (art.7). Establece la obligación de los Estados para adoptar medidas a fin de eliminar la discriminación y garantizar los derechos políticos de las mujeres (art. 8).

Posteriormente en 1992, en el marco de la convención, el Comité de la CEDAW emite la Recomendación General No. 19, con el fin de plantear que la violencia es consecuencia de la discriminación contra las mujeres, por lo tanto, los Estados están obligados a atender las causas de discriminación y su síntoma que es la violencia.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, instrumento regional para América Latina signada en el 1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoce como derechos protegidos: el acceso a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en privado, a la igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones (art. 3 y 4), así como el ejercicio libre y pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de tal manera que la violencia contras las mujeres impide y anula el ejercicio de estos derechos (OEA, 1994).

A partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, ante la escasa presencia femenina en los cargos políticos se implementaron las acciones afirmativas, entre ellas, el sistema de cuotas de género como una medida para incrementar su participación a través de reformas jurídicas con el fin de equilibrar las desigualdades que éstas enfrentan en el acceso a dichos cargos (Peschard, 2002).

El Comité de la CEDAW emitió la Recomendación General No. 23 en 1997, en el que pretende identificar los obstáculos que impiden la participación de las mujeres tanto en la vida política como pública y eliminar la idea de que las mujeres pertenecen la a vida “privada”. Los Estados deben garantizar mecanismos efectivos, no sólo de sus derechos políticos sino ampliarlos mediante modificaciones constitucionales y legislativas para la adopción de medidas positivas que garanticen la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas.

El Consenso de Quito, 2007, establece como un eje estratégico la participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles. Nuevamente, se enfatiza que los Estados deben “Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos” (CEPAL, 2007:5).

En la actualidad, a pesar de los instrumentos internacionales, la problemática de exclusión, discriminación y subrepresentación de las mujeres en la esfera política persiste en el escenario mundial.

En el reporte 2012 la *Unión Interparlamentaria* registra que el promedio mundial de mujeres en las cámaras únicas o bajas es del 19.7%. Al desagregar las cifras por regiones, el contraste entre los Países Nórdicos con las Américas y la del Pacífico es significativo, mientras para la primera es del 42.0%, para las otras, el promedio es del 22.6% y 12.4% respectivamente (UIP, 2012).

En el caso de los países que cuentan con Senado o cámara alta, los porcentajes más altos de senadoras son para Bolivia (47.2), Burundi (46.3), Bélgica (40.8) y Argentina (38.9). Respecto de los cargos ministeriales en la región latinoamericana, el promedio por arriba del 40 por ciento de mujeres en estos cargos son Nicaragua (46.2), Bolivia (45.5) y Ecuador (40.0).

Las mujeres como titulares del poder ejecutivo en los municipios, en año 2012, el promedio regional no rebasa el 11%, Uruguay y Bolivia registran los promedios más altos por arriba de 20%; más desalentador aún, es la titularidad en el nivel intermedio de gobierno como gobernadoras, pues no supera el 5.6% (Rodríguez y Cozzi, 2012). Asimismo, en el 2012 se registra en la región latinoamericana la participación sólo de tres mujeres como jefas de Estado en Argentina, Brasil y Costa Rica (UIP, 2012).

Las cifras referidas ayudan a evidenciar que los Estados en la región latinoamericana, a pesar de los avances, no han cumplido con las disposiciones

internacionales para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso efectivo en los órganos de toma de decisión política ¿por qué las mujeres están infrarrepresentadas en la política? y ¿por qué no avanzamos de manera efectiva?

III. Estado de la cuestión

Existe un amplio consenso en la literatura académica de que el ambiente de la política es un espacio masculino (Astelarra, 1990; Fernández, 1995, 1999; Tarrés, 1998; De Barbieri, 2003; Luna, 1996; Cejas, 2008; Lovenduski y Karam, 2002, Castro, 2009).

Los estudios que abordan las relaciones de género en los ámbitos de la política institucionalizada enfatizan que las instituciones no son neutrales al género, ya que la subordinación de las mujeres a los varones está presente y tiene un anclaje en las instituciones del Estado (De Barbieri, 2003; Huerta y Magar, 2006; García, 2010; Varela, 2010, 2012).

De Barbieri plantea el debate sobre el peso del género en las estructuras institucionales, como espacio de expresión del conflicto entre los sexos (De Barbieri, 2003). En las instituciones también podemos encontrar, prácticas de discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres políticas porque están presentes en todos los ámbitos sociales ¿Por qué las mujeres que se dedican a la política se enfrentan a diversos obstáculos? ¿Qué tipo de obstáculos son más comunes?

De manera general, las mujeres que llegan a las instituciones de poder se encuentran con diversos obstáculos: *políticos*, desequilibrio en la representación y el enfrentamiento con un modelo masculino, por lo tanto, hay resistencia; *ideológicos y psicológicos*, patrones culturales de género y falta de confianza en sí mismas, por la imagen que se tiene de la política como “juego sucio” (Shvedova, 2002).

Respecto del factor cultural, investigaciones recientes coinciden en el peso que tienen los roles y los estereotipos de género como un obstáculo para que las mujeres se

desempeñen en los espacios de poder (Lamas y Azuela, 2010; Marx y Borner, 2011; Marx, Jutta, *et.al*, 2007; Castro, 2009; Barrera y Suárez, 2012; Richard, 2011; Massolo, 2007; Borner, *et. al*, 2009; Mosquera, 2006).

Un estudio multinacional en la región latinoamericana aborda las tensiones que viven las legisladoras en el congreso como lugar de trabajo. Marx y Borner (2011) indagan las condiciones del trabajo parlamentario y los niveles de decisión de legisladoras en los congresos nacionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú y Uruguay.

Estas autoras utilizan la perspectiva de género para indagar el grado de inclusión de la equidad de género en los parlamentos. Recurren el uso de instrumentos cuantitativos y cualitativos para revisar las *reglas formales* (normatividad jurídica) e *informales* (interacciones cotidianas entre legisladores y legisladoras) en los congresos, a partir de cinco ejes temáticos: las licencias de maternidad y paternidad, infraestructura, horarios de trabajo, uso del lenguaje y acoso sexual (Marx y Borner, 2011).

Como resultado del análisis de la dimensión formal (Marx y Borner, 2011: 22-27) concluyen que los parlamentos: a pesar de la creciente incorporación de las mujeres, no promueven medidas para asegurar condiciones de equidad de género en su labor parlamentaria pues carecen de reglamentación interna al respecto (Marx y Borner, 2011:22).

Además, los congresos no cuentan con políticas propias para licencias por maternidad y paternidad, ni se prevé los remplazos durante la vigencia de las licencias. En particular, esto afecta a las legisladoras, pues pueden verse obligadas a no hacer uso de tales licencias. En el caso de los legisladores, es menor el tiempo de licencia (se reduce a unos cuantos días) con lo cual se limita la participación equitativa en el cuidado de los hijos e hijas.

En la mayoría de los países estudiados, la infraestructura de los parlamentos no prevé la prestación de servicios de guardería infantil y disposiciones para madres lactantes.³ Respecto del horario del trabajo parlamentario, la persistencia de realizar sesiones nocturnas de las sesiones plenarias es una práctica común de la mayoría de los congresos. Incluso, las sesiones no se adaptan a los calendarios escolares. De manera general, los horarios pueden afectar en mayor medida a las legisladoras por su condición de madres, esposas y cuidadoras, lo que impacta en la doble jornada laboral y dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral, mientras que para los legisladores esto no representa fuentes de tensión.

En el caso del uso del lenguaje, persiste la redacción en los reglamentos a partir de denominaciones masculinas.⁴

Sobre la problemática del acoso sexual el tema está excluido de la reglamentación parlamentaria pues legislación nacional establece mecanismos contra el hostigamiento sexual en diversos países.

Por otra parte, en la dimensión informal o las reglas no escritas, de la información obtenida mediante entrevistas, las autoras evidencian que en las interacciones cotidianas, las legisladoras enfrentan prácticas de discriminación por prejuicios de género como “la naturalizada predominancia de la voz masculina” (Marx y Borner, 2011:27), por ejemplo, las legisladoras perciben el uso limitado del tiempo para exponer sus ideas, si se comparte el tiempo, tiene preferencia el legislador; se valora de manera diferencial la labor de las legisladoras, por ello, se ven obligadas a trabajar más que sus compañeros para ser reconocidas, en condiciones de igualdad.

Además, las legisladoras perciben que deben ganarse el respeto por el trabajo que desempeñan y demostrar permanentemente su capacidad. Enfrentarse a la política implica

³ En los congresos de Argentina y Bolivia se prevé la prestación de servicios de guardería infantil, y en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Perú existen disposiciones para madres lactantes (Marx y Borner, 2011:23).

⁴ Solamente en el caso de Bolivia y Ecuador se considera un lenguaje inclusivo en los documentos oficiales, según lo revisado por Marx y Borner, 2011.

descifrar códigos masculinos, por ejemplo, las conversaciones, los arreglos y las negociaciones políticas entre sus pares masculinos. Se subvaloran las temáticas de género, ya que son consideradas como irrelevantes o marginales para la agenda parlamentaria y por tanto, son ridiculizadas (mediante burlas), por sus pares masculinos (Marx y Borner, 2011:28).

Se halla que determinadas iniciativas de género no se turnan a la comisión de género (comisión de cabecera) lo que genera demoras para su dictaminación o bien, se quedan sin discusión (Marx y Borner, 2011). Otra estrategia, como recurso institucional, es la derivación de las propuestas a múltiples comisiones como una forma de control de la agenda del congreso (Calvo, 2007, citado en Borner, et al: 2009:70).

Del análisis de la dimensión informal se concluye que las relaciones cotidianas de género inciden de manera negativa en acceso de las legisladoras a las instancias de negociación política como las reuniones informales en lugares extra parlamentarios.

Los resultados obtenidos de los diversos congresos nacionales contribuyen a visibilizar indicadores de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres en estos espacios, producto de la falta de equidad de género en la labor parlamentaria. A pesar de la existencia de un contexto internacional favorable sobre el tema de igualdad y equidad en los espacios de la política, es un tema poco explorado académicamente en los niveles nacionales y, aún más, en los ámbitos de los congresos sub nacionales o estatales.

En el caso de la nación argentina, el congreso nacional ha sido un modelo paradigmático a nivel internacional debido a la incorporación sustantiva de las mujeres en los ámbitos parlamentarios, la participación es cercana al 40% (Borner, et al: 2009:18).

Con el fin de examinar si las elevadas proporciones de mujeres favorecen la igualdad de oportunidades y de trato entre legisladoras y legisladores, Borner *et. al.* (2009) recurren a métodos cuantitativo y cualitativo para identificar dinámicas de igualdad y desigualdad en el congreso argentino. Centran su atención en las dinámicas

organizacionales y la construcción de jerarquías dentro del congreso para identificar las prioridades de política de legisladoras y legisladoras (Borner, *et. al.*: 2009:18).

De las dinámicas organizacionales concluyen que las jerarquías establecidas en las organizaciones producen desigualdades fundadas en criterios de género. La valoración de actividades, el prestigio y reconocimiento varían según el sexo como consecuencia de los estereotipos y prejuicios sociales vigentes (Borner, *et. al.*: 2009:63-64).

Lo que hace indicar que, a pesar de la alta presencia numérica de legisladoras, lo que Dahlerup, (1993), denomina “masa crítica”,⁵ persiste la exclusión de las presidencias tanto en las comisiones como de las jefaturas de los bloques políticos. Esta es una barrera significativa para acceder a posiciones de autoridad, negociación política y control de recursos.

El mayor incremento de las mujeres en estos espacios no resuelve la problemática cultural de desigualdad entre los géneros, pues la representación del mundo está basada desde una visión androcéntrica o lo que Bourdieu (2000) ha señalado como dominación masculina. Por lo tanto, las instituciones políticas son organizaciones *generizadas*,

Una organización, o cualquier otra unidad de análisis, está generizada, significa que las ventajas y las desventajas, la explotación y el control, la acción y la emoción, el significado y las identidades, cobran forma a través de, y en términos de, una distinción entre hombre y mujer, masculino y femenino. El género no es algo que se agrega a procesos en curso, concebidos como neutrales. Por el contrario, es una parte integral de estos procesos, los cuales no pueden ser apropiadamente comprendidos sin un análisis de género (Acker, 1990 citado en Borner, *et. al.*: 2009:64-65).

Borner, *et. al.* (2009) enfatizan que las desigualdades de género en las dinámicas informales se traducen en: apropiación por parte de varones de los recursos materiales y

⁵ De acuerdo con Drude Dahlerup, el umbral 30 por ciento de las mujeres en los parlamentos garantizaría la masa crítica, “Un incremento cuantitativo en el número relativo de una minoría dará lugar a una situación nueva y diferente en la cual la minoría será capaz de movilizar los recursos de las organizaciones o instituciones para acelerar el incremento de sus números –y mejorar su posición en general” (Dahlerup, 1993: 205).

simbólicos más valorados, relaciones más débiles (en comparación con los legisladores) con los jefes de los bloques políticos, lo que disminuye su participación en la toma de decisiones y negociaciones, valoración diferencial de las mujeres respecto de sus actividades y el predominio de la voz masculina en debates, diálogos y conversaciones. En síntesis, “las legisladoras serían valoradas primordialmente como mujeres y subsidiariamente como políticas” (Borner, *et. al.*:2009:68). Por lo tanto, las dinámicas informales brindan mayores ventajas a los legisladores.

Los congresos de Brasil, Guatemala y Uruguay han aportado experiencias innovadoras para revertir las dinámicas informales en la reducción de brechas de desventaja, ante la reducida presencia numérica de las mujeres. Por ejemplo, las bancadas femeninas dentro de la organización formal legislativa han permitido la articulación, la discusión y la promoción de temas de género en la agenda legislativa (Marx, *et.al.* 2007; Johnson, 2006, 2013; Marx y Borner, 2011).

Los congresos de Bolivia, Ecuador y Perú han establecido alianzas, a través de figuras que operan como comisiones especiales o como instancias de concertación interpartidaria pero están sujetas a la participación voluntaria, su duración es limitada (por lo menos a un año, aunque con posibilidades de prórroga), la toma de decisiones es limitada pues no se encuentran en la estructura formal, aun cuando estén como comisiones especiales, no tienen la misma fuerza legislativa que las comisiones permanentes y carecen de presupuesto. Sin embargo, representan espacios para la integración del enfoque de género en el trabajo legislativo (Marx y Borner, 2011: 38-41).

Desde luego, las alianzas no están exentas de conflictos, ni tampoco hay unanimidad en sus posiciones políticas e ideológicas, se entrecruzan con otros elementos como la pertenencia, lealtad y disciplina de partido (Marx, *et.al.* 2007; Mosquera, 2006).

Otras investigaciones han documentado el registro sobre la experiencia denominada violencia política contra las mujeres en las esferas locales o los gobiernos municipales

(Massolo, 2007; TEPJF *et. al*, 2012; Lamas y Azuela, 2010; Barrera y Suarez, 2012; López, 2005; Varela, 2012).

En el contexto mexicano, los estudios realizados sobre mujeres políticas que ejercen el cargo tanto en los ámbitos legislativos como municipales, similarmente, señalan que enfrentan tensiones relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral, los horarios de trabajo, acceso desigual a los cargos así como la propia descalificación entre las mujeres (Lamas y Azuela, 2010).

En el ámbito municipal, a través de entrevistas, se han documentado prácticas de exclusión más frecuentes en el trabajo cotidiano que redundan en la descalificación de la capacidad (de mando, de dirigencia y de negociación) de las mujeres al trasgredir un espacio masculino “se considera que ellas no están en los espacios que les son propios: la casa y el cuidado de la familia” (Barrera y Suarez, 2012:215).

Esta trasgresión de las mujeres tiene sus consecuencias, entre ellas, los casos más extremos del poder coercitivo son el *acoso político* y la *violencia política*, denominados hostigamiento político (López, 2005; Massolo, 2007; Varela, 2012) pues son acciones que “buscan impedir o restringir el ejercicio de su cargo, obligarla a tomar decisiones contrarias a su voluntad, de sus principios y de la ley” (Barrera y Suarez, 2012:218), mediante la obstaculización del trabajo, el desprestigio social (rumores en torno a la sexualidad), limitación o falta de apoyos económicos, reprimendas por fiscalizar (que puede llegar al desconocimiento del cargo, daños a sus bienes patrimoniales personales, amenazas de muerte, humillaciones) y la indiferencia de las autoridades, cuando se interponen denuncias por desviación de los recursos públicos (Barrera y Suarez, 2012:215).

En Costa Rica, mediante entrevistas individuales, grupos focales y un taller de devolución de resultados se exploraron las diversas formas de discriminación política que viven las mujeres electas en puestos de elección popular a nivel local (Escalante y Méndez: 2011). Las conclusiones del estudio señalan la diversidad de situaciones de acoso político como la discriminación y la subordinación por el hecho de ser mujeres, la descalificación

de sus acciones, propuestas o aportes, el acoso sexual, acoso, manipulación o asedio para tomar decisiones a favor de otro/as.

El problema principal detectado en el caso costarricense es que en las denuncias por acoso político (resistencia activa) han sido infructuosos “las instituciones y las autoridades las ven como casos aislados y no son considerados como hechos reales y mucho menos como problemas generalizados y públicos” (Escalante y Méndez, 2011:27). Así que las respuestas de las mujeres frente a estos actos se centran exclusivamente en los recursos personales (resistencia pasiva): hacer caso omiso, no contestar ante las provocaciones o mantener la calma.

En el Salvador se documenta que el acoso sexual es el acto más común de la hostilidad y violencia política que, por razones de género, viven las mujeres en los ámbitos locales (Herrera, *et.al.* 2011). Las insinuaciones por su vestimenta, piropos y proposiciones sexuales, son las más recurrentes, según lo señalado por las mujeres entrevistadas. El desprestigio con connotaciones sexuales es otro de los factores más comunes. (Herrera, *et.al.*, 2011).

Un estudio reciente muestra que en distintas etapas hallamos expresiones de la violencia contra las mujeres: a) como precandidatas y candidatas, b) como legisladoras y autoridades municipales electas, c) como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones (TEPJF *et.al.* 2012:4).

En la primera etapa, la electoral, engloba aquellas expresiones de violencia en que las elites partidistas hacen mal uso de los presupuestos tanto aquel dirigido a la capacitación y promoción de liderazgos de las mujeres⁶ como el destinado a las campañas políticas, lo que

⁶ Producto de la reforma electoral de 2008, en México se establece la acción afirmativa que obliga a los partidos políticos a destinar el dos por ciento de su presupuesto correspondiente al financiamiento público ordinario a la capacitación promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Sin embargo, el ejercicio de esos recursos no es ocupado para los fines por lo que fue creado sino que, de acuerdo con algunos informes entregados al extinto Instituto Federal Electoral, el destino de los recursos ha sido empleado para la renta de salones, material de propaganda política, aguinaldos y para la adquisición de productos de limpieza como escobas y detergente (Soto, 2014). Con la reforma reciente de 2014 se incrementó al tres por ciento.

incide en el escaso apoyo de recursos materiales y humanos para las candidaturas de las mujeres, además de presiones hacia éstas para ceder o no reclamar la candidatura.

En la segunda etapa, una vez concluidas las campañas, se detectan las sustituciones arbitrarias o presiones para que renuncien a favor de sus suplentes (normalmente varones).

En la tercera, una vez que las mujeres ocupan el cargo, enfrentan diversas tensiones. Como un ejercicio analítico se busca diferenciar las expresiones de violencia en dos grupos (Tabla 1):

Tabla 1. Expresiones de violencia contra las mujeres en la esfera política

Violencia directa (visible)	Violencia indirecta (invisible)
<p>Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local.</p> <p>Intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación sexual.</p> <p>Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas.</p> <p>Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes.</p> <p>Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación.</p>	<p>Mayor exigencia que a los varones.</p> <p>Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses.</p> <p>Ocultamiento de información.</p> <p>Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas</p> <p>Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas.</p> <p>Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.</p> <p>Juzgamiento de la vida personal: su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo.</p>

Fuente: Elaboración propia con base en la información del estudio TEPJF *et. al.*, 2012

Los hallazgos del estudio sirvieron para que, en el año 2012, se presentara en el Senado de la República una iniciativa⁷ para incluir la modalidad de violencia política en la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* y adiciones al *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales* (COFIPE). Como resultado, se turnó a las comisiones de Equidad y Género y de Estudios Legislativos de la cámara alta. Hasta la presente fecha aún no hay resolución.

Otro estudio documenta mediante entrevistas a diputadas expresiones de violencia en el espacio legislativo a nivel subnacional, se resume en la tabla 2:

Tabla 2. Expresiones de violencia de género contra las diputadas en el congreso subnacional

Violencia directa (visible)	Violencia indirecta (invisible)
<p>Coacción para frenar o no aprobar leyes que beneficien a las mujeres.</p> <p>Obligación de votar iniciativas, aun cuando manifiestan su posición en contra de dichas iniciativas.</p> <p>Amenazas de hacer públicas las posturas de las diputadas ante determinados temas para evidenciarlas.</p> <p>Amenazas por cuestionar las decisiones tomadas en el seno del órgano legislativo.</p> <p>Desaprobación por parte de los diputados cuando las mujeres hacen críticas.</p>	<p>Desinterés y resistencia por parte de sus compañeros varones para aprobar leyes relacionadas con la temática de las mujeres.</p> <p>Acceso desigual a los recursos y posiciones que tienen los varones. Conflictos con la burocracia administrativa para retrasar la publicación de leyes que consideren las temáticas de las mujeres.</p> <p>Desvalorización por la falta de preparación académica o bien, por la falta de una trayectoria política.</p> <p>“Celo político” por acceder a posiciones reservadas para los varones.</p> <p>Invisibilización y desvalorización de las suplencias.</p> <p>Apropiación del trabajo femenino.</p>

⁷ La Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI presentó la iniciativa en el Primer Periodo Ordinario de la LXIII Legislatura el 13 de Noviembre de 2012.

	<p>Silenciamiento de las mujeres ante actitudes hostiles de parte de sus compañeros para evitar el conflicto.</p> <p>Costos políticos y terminación de la carrera política por indisciplina.</p> <p>Horarios de trabajo que tensionan a las mujeres por la asignación de roles sociales: como madres, esposas, cuidadoras.</p>
--	--

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la investigación de García, 2010.

Como se observa, los estudios anteriores documentan y sistematizan las expresiones de violencia de género contra las mujeres. Algunas prácticas son más explícitas o directas, en tanto son observables, mientras que otras son más sutiles, difíciles de detectar.

El caso paradigmático sobre el tratamiento de la violencia de género contra las mujeres políticas ha sido Bolivia. La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), integrada por alcaldesas y concejalas⁸, reportó que, entre 2000 y 2005, se denunciaron 200 actos de violencia y acoso contra concejalas y alcaldesas, entre las cuales, el rubro más destacado fue la presión de renuncia al cargo o impedimento de ejercicio al mismo, le siguen actos de violencia verbal, psicológica, física y sexual (TEPJF *et. al.*, 2012; Massolo, 2007). Aunque se estima que la cifra se cuadruplica por los casos que no son denunciados (Massolo, 2007:55).

Como la estrategia para presionar a favor de la aprobación de la ley se establecieron cuatro las líneas de acción: a) desarrollo de acciones para la atención de casos de acoso y violencia política a través de la Red de Asociaciones Departamentales de Concejalas para

⁸ La ACOBOL se organiza en nueve asociaciones departamentales de concejalas con presencia nacional. El objetivo general es constituirse en la instancia asociativa de representación y contribución al servicio de las Alcaldesas y Concejalas del país para garantizar el buen desempeño de funciones municipales en pleno respeto a sus derechos políticos. Entre sus objetivos específicos están: la defensa de sus asociadas frente a la discriminación o agresión contra los derechos políticos que el ejercicio de su mandato se presenten así como constituir una red de información con otras instituciones similares a nivel nacional e internacional. Información obtenida del sitio electrónico <http://www.acobol.org.bo/>

brindar asesoría; b) diseño, difusión y actualización del proyecto de ley para establecer alianzas y redes con otras instituciones para la aprobación de la ley; c) diseño del protocolo para la atención de casos ante el Tribunal Supremo Electoral; d) acciones de empoderamiento de las concejalas, mediante procesos de sensibilización, formación e información con distintos actores.

Los datos de ACOBOL y la estrategia implementada sirvieron para la promulgación de la *Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres* de Bolivia, publicada el 28 de mayo de 2012, la primera ley en su tipo en todo el mundo. El objeto de la ley es “establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos” (art.2). La particularidad radica en que su aplicación es amplia, es decir, no se limita a las mujeres en cargos electivos sino también a las mujeres designadas o en el ejercicio de la función pública

Desde luego, el proceso para vencer las resistencias frente a la problemática de la violencia de género en la política fue lento. Las denuncias públicas por el acoso y violencia política por ACOBOL inician en el 2000. Al siguiente año se presenta el proyecto de ley y once años después se promulga la ley.

Otra cuestión que resulta más sutil y menos obvia es el debate sobre si las mujeres políticas representan intereses de las propias mujeres (Johnson, 2006, 2013; Norris, 1997; Htun, 2002; Dahlerup, 1993, 2002; Lois y Diz, 2006; Phillips, 1996). Los resultados de los diversos estudios no son concluyentes, por el contrario, la heterogeneidad en sus conclusiones muestran posturas contrapuestas.

Algunas investigaciones señalan que las mujeres hacen contribuciones importantes mientras, la otra postura enfatiza que no hay diferencias entre hombres y mujeres, por el contrario, hay grandes similitudes en la forma de hacer política (Johnson, 2006, 2013; Lois y Diz, 2006).

Investigaciones recientes en los países Escandinavos, Skard y Haavio-Mannila 1985 (citadas en Johnson, 2013) han encontrado que en las legislaturas subnacionales, las mujeres principalmente promueven una agenda legislativa con temas de género y de mujeres.

En el caso de Gran Bretaña, tanto a nivel nacional como en los cuerpos congresionales de los estados, las mujeres presentan iniciativas en la defensa de los derechos de las mujeres o en áreas relativas a los roles tradicionales, por tanto, adoptan posicionamientos compatibles con el feminismo, según las aportaciones de Dodson and Carroll 1991, Swers 1998, Childs 2004 (citadas en Johnson, 2013).

Otras investigaciones concluyen que la conciencia feminista (más que el sexo) y el partido político son variables relevantes para identificar diferencias en actitudes y acciones, según Tremblay 1998; Tremblay and Pelletier 2000; Trimble 1997 and 1998, Celis 2006 (citadas en Johnson, 2013).

En el contexto latinoamericano, una primera aproximación sobre la dificultad de construir agendas de género es que las mujeres pueden no ser una minoría numérica, sin embargo, la minoría radica desde el punto de vista del poder con el que cuentan (Zaikoski, 2012) o bien, porque las agendas públicas son definidas desde una perspectiva masculina o androcéntrica que omite las necesidades de lo femenino,

El contundente poder de la visión patriarcal en las leyes se ve permanentemente asegurado por diversos factores...[entre ellos] La exigua presencia de mujeres en el Poder Legislativo, las culturas parlamentarias androcéntricas, la ignorancia sobre el tema de la mayoría de los parlamentarios y de muchas mujeres parlamentarias..., la ausencia en los Parlamentos y aún en las Comisiones de Derechos de las Mujeres de cuadros de apoyo adecuadamente preparados que soporten las exigencias conceptuales y técnicas que supone el enfoque de género en las leyes [por lo que] allana el camino al mantenimiento de los enfoques patriarcales tradicionales (García, 2005: 106-107).

Son prácticamente inexistentes las investigaciones que utilizan la categoría de la violencia de género como variable explicativa de la construcción de la agenda de género

tanto en los parlamentos como en los gobiernos municipales. De ahí que se hace necesario sistematizar y profundizar su estudio.

A manera de conclusión

La existencia de acuerdos internacionales ha producido cambios en las agendas de los Estados que han suscrito las Declaraciones y Convenciones en torno a la discriminación y la violencia de género. No obstante, aún falta recorrer un largo camino para lograr la igualdad y equidad de género en todas las esferas sociales así como la protección efectiva los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres tanto en el espacio público como el privado. Los avances en las legislaciones nacionales y la adopción de medidas específicas, entre ellas las cuotas de género en los cargos de elección, para la promoción igualitaria de las mujeres en la esfera política son significativos, sin embargo, son insuficientes.

La problemática de la violencia de género hacia las mujeres en el espacio político se ha visibilizado, por un lado, gracias a la denuncia de las mujeres que han experimentado diversas expresiones de violencia en el contexto político, la articulación o establecimiento de redes (ya sea a través de las bancadas, organizaciones gubernamentales y asociaciones civiles) para compartir experiencias así como dirigir acciones colectivas hacia la prevención, sanción y erradicación, mediante la propuesta legislativa, cuyo proceso ha sido lento o bien, los Estados siguen sin considerarla como un problema ante un mayor incremento de mujeres en los cargos de elección; por el otro, la contribución de diversos estudios que la documentan nos brindan un panorama sobre la amplitud de fenómeno, la gama y diversidad de las expresiones de violencia: unas más visibles y otras, más sutiles o simbólicas de violencia en razón del género, como se ha abordado en el presente artículo, cuyas consecuencias afecta no sólo las vidas de la mujeres políticas sino además permite cuestionarse la condición democrática de los países latinoamericanos.

Desde el feminismo latinoamericano se cuestiona la ideología patriarcal en la que descansa la violencia de género, lo que se constituye la barrera cultural más importante. El grupo de mujeres es visto como subordinado, generalmente sus colegas masculinos no las

ven como iguales pues son evaluadas más como mujeres que como sujetos políticos, transgreden un ámbito que “no les pertenece”.

Como se ha visto, en la práctica, la igualdad plena entre hombres y mujeres en el espacio de la política representa constantes desafíos, tensiones y resistencias. La ideología patriarcal se resiste a la transformación de la des jerarquización del poder y refuerza, mediante mecanismos culturales e institucionales, el estatus de subordinación de las mujeres con respecto los hombres en la toma de decisiones. Por ello, resulta crucial que los Estados cumplan efectivamente con los derechos políticos de las mujeres, los amplíen y dirijan acciones para erradicar la violencia en todos los ámbitos sociales para hablar de una ciudadanía efectiva.

Entre los principales problemas de la violencia de género son: las instituciones políticas en la región latinoamericana carecen de bases de datos y cifras que permitan dimensionar el problema; culturalmente, la violencia de género tiende a silenciarse, ocultarse, o bien, a justificarse; entre los mecanismos institucionales, la falta de tipificación como delito en la normatividad conlleva a la inexistencia del castigo. Adicionalmente, la dificultad en la construcción de un marco teórico que permita abordar conceptos como el acoso o violencia política como una de las formas de la violencia de género es incipiente (Machicao, 2011).

De ello resulta que la categoría de género es de particular relevancia. Las interacciones de género se tornan conflictivas, en particular para las mujeres en tanto se concibe a la política institucional como un espacio masculino, consecuencia de la subrepresentación histórica de las mujeres, pero también resulta ser un espacio tensionante derivado de los roles de género socialmente atribuidos como son: la maternidad, las labores de cuidado, las tareas domésticas, los horarios de trabajo, la conciliación de la vida familiar y laboral, la sexualidad de las mujeres (el desprestigio en torno a vida personal), los estereotipos, la división sexual del trabajo, todos ellos inciden en la violencia de género contra las mujeres.

Lo anterior abre un abanico de posibilidades de investigación, en primera instancia, continuar con la visibilización, documentación así como la sistematización de la violencia de género contra las mujeres en la política latinoamericana con el fin de construir un marco teórico más sólido; en segunda instancia, dirigir esfuerzos colectivos para establecer mecanismos de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Finalmente, desmontar el determinismo biológico de la diferencia sexual hace necesario plantear el cambio radical de valores patriarcales para transformar a las sociedades hacia la igualdad y la equidad.

BIBLIOGRAFÍA

Astelarra, Judith. 1990. “El espacio de la política” en Judith Astelarra (Comp). Participación política de las mujeres. Madrid: Siglo XXI.

Barrera Bassols, Dalia y Blanca Suárez San Román. 2012. “Los desafíos de llegar y de ejercer un cargo. Mujeres Mexicanas en los albores del siglo XXI”, Ra Ximhai, año/Vol. 8, Número 1, enero-abril, Sinaloa, UAIM, pp.199-223.

Banchs, María A. 1996. “Violencia de Género”, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. II, núm 2, julio-diciembre, Caracas, Universidad Central de Venezuela, pp. 11-23.

Breith, Jaime. 1993. Género, poder y salud. Quito: Ibarra, CEAS-UTN.

Borner, Jutta, Mariana Caminoti, Jutta Marx y Ana Laura Rodríguez Gustá. 2009. Ideas, presencia y jerarquías políticas: claroscuros de la igualdad de género en el Congreso Nacional de la Argentina, Buenos Aires: Prometeo Libros, PNUD.

Bourdieu, Pierre. 2000. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

Castro Apreza, Inés. 2009. “La participación política de las mujeres en México. Mujeres en cargos de elección popular y toma de decisiones” en Participación política de la mujer en México. México: CNDH, pp.107-176.

Castro Pérez, Roberto. 2012. “Problemas conceptuales en el estudio de la violencia de género” Norma Baca Tavira y Graciela Vélez Bautista (Coords). Violencia, género y la persistencia de la desigualdad en el Estado de México, Buenos Aires: MNEMOSYNE, pp. 17-38.

Cejas, Mónica. 2008. “Introducción” en Mónica Cejas (Coord.) Igualdad de género y participación política. México: COLMEX Centro de Estudios de Asia y África, pp. 9-18.

Dahlerup, Drude. 2002. "El uso de cuotas para incrementar la representación política de la mujer" Myriam Méndez-Montalvo y Julie Ballington (Eds.) *Mujeres en el parlamento. Más allá de los números*. Estocolmo: IDEA.

----- . 1993. "De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la 'masa crítica' aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava". *Debate feminista*, año 4, vol. 8, septiembre, México, pp.165-206.

De Barbieri, Teresita. 2003. *Género en el trabajo parlamentario: la legislatura mexicana a fines de siglo XX*. Buenos Aires, CLACSO.

Escalante Herrera, Ana Cecilia y Nineth Méndez Aguilar. 2011. *Sistematización de experiencia de acoso político que viven o han vivido las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local*. República Dominicana: ONU Mujeres, INAMU.

Fernández Poncela, Anna M. 1999. *Mujeres en la élite política: testimonios y cifras*. México: UAM-Xochimilco.

----- . 1995. "Participación social y política de las mujeres en México: un estado de la cuestión" Anna M. Fernández Poncela(Comp.) *Participación política de las mujeres al final del milenio*. México: El Colegio de México.

García Fajardo, Silvia. 2010. "¿Iguales pero diferentes? La participación política de las mujeres en el ámbito parlamentario a partir del tipo de candidatura en la LVI Legislatura del estado de México 2006-2009. Tesis de maestría. México, UAM-X.

García Prince, Evangelina. 2005. "Sentido y contenidos de la construcción de una agenda legislativa para el desarrollo de los derechos de las mujeres". *Otras Miradas*, vol. 5, núm. 2, diciembre, Venezuela: Universidad de los Andes, pp.93-127.

Herrera, Morena, Mitzy Arias y Sara García. 2011. *Hostilidad y violencia política revelando realidades de mujeres autoridades municipales. Sistematización de experiencias de violencia política que viven mujeres electas en gobiernos municipales en el Salvador*. República Dominicana: ONU Mujeres, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la mujer.

Htun, Mala N. 2002. "Mujeres y poder político en Latinoamérica". Myriam Méndez-Montalvo y Julie Ballington (Eds.). *Mujeres en el parlamento. Más allá de los números*. Estocolmo: IDEA, 2002, pp.19-43.

Huerta García, Magdalena y Eric Magar Meurs (Coords). 2006. *Mujeres Legisladoras en México. Avances, obstáculos, consecuencias y propuestas*. México: INMUJERES.

Izquierdo, María de Jesús. 2001. *Sin vuelta de hoja. Sexismo: Placer, poder y trabajo*, Barcelona: Bellaterra.

Jiménez Bautista, Francisco. 2012. "Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad". *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 19, núm. 58, Toluca: UAEM, pp. 13-52.

Jusidman, Clara. 2010. "Introducción" en Milagros Cabrera López y Sergio Salvador García (Comps.) *Foro Interdisciplinario orígenes de la violencia*. México: CONAVIM/INCIDE SOCIAL, pp.9-14.

Lamas, Marta y Mayte Azuela. 2010. "Con la cultura en contra. Algunas reflexiones sobre los obstáculos que las mexicanas enfrentan para ejercer sus derechos políticos". *Género y derechos políticos*, México: TEPJF, pp. 29-73.

Lamas, Marta. 2006. *Feminismo. Transmisiones y retransmisiones*. México: Taurus.

-----, 1999. "Género, diferencias de sexo y diferencia sexual". *Debate feminista*, año, 10, vol. 20, México, pp.84-106.

Lois, Marta e Isabel Diz. 2006. "¿Qué sabemos sobre la presencia política de las mujeres y la toma de decisiones? Claves para un marco de análisis. *Política*, núm. 46, Santiago: Universidad de Chile, pp.37-60.

Lovendusky, Loni y Azza Karam. 2002. "Mujeres en el Parlamento. Estrategias para marcar la diferencia" en Myriam Méndez-Montalvo y Julie Ballington (Eds.). *Mujeres en el parlamento. Más allá de los números*. Estocolmo: IDEA, pp. 201-237.

Luna, Lola G. 1996. "La otra cara de la política: exclusión e inclusión de las mujeres en el caso latinoamericano". *Boletín Americanista*, año XXXVI, núm. 46, Barcelona: Universidad de Barcelona, pp.153-159.

Marx, Jutta, y Jutta Borner. 2011. *Parlamentos sensibles al género. Estado de la cuestión en América Latina*. Perú: IDEA, Unión Interparlamentaria.

Marx, Jutta, *et. al.* 2007. *Las legisladoras: cupos de género y política en Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana.

Massolo, Alejandra. 2007. *La participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina*. Santo Domingo: INSTRAW.

McDowell, Linda. 2000. *Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas*. Madrid: Cátedra.

Mosquera Andrade, Violeta. 2006. "Mujeres congresistas: estereotipos sexistas e identidades estratégicas. Ecuador", tesis de maestría. Ecuador: FLACSO.

Nicholson, Linda. 2003. "La interpretación del concepto género" Silvia Tubert (Ed.). *Del sexo al género. Los equívocos de un concepto*, Madrid: Ediciones Cátedra/Universitat de Valencia/Instituto de la Mujer.

Norris, Pipa. 1997. "Las mujeres políticas: ¿un nuevo estilo de liderazgo?" en Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo (Coords.). *Mujeres en política*, Barcelona: Ariel, pp.76-93.

Pateman, Carole. 1995. *El contrato sexual*. Barcelona: Anthropos, UAM-IZT.

Peschard, Jacqueline. 2002. "El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general" en Myriam Méndez-Montalvo y Julie Ballington (Eds.) *Mujeres en el parlamento. Más allá de los números*. Estocolmo: IDEA, pp. 173-186.

Phillips, Anne. 1996. *Género y teoría democrática*. México: UNAM.

Puleo, Alicia H. 1995. "Patriarcado" Celia Amorós. *Diez palabras clave sobre mujer*. Navarra: Verbo Divino.

Rodríguez Gustá, Ana Laura y Celeste Cozzi. 2012. *¿Cuánto hemos avanzado? Un análisis de la participación política de las mujeres en los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe*. Panamá: PNUD-ONU MUJERES.

Sanmartín Esplugues, José. "Concepto y tipos de violencia" en José Sanmartín, *et.al.* (Coords.). *Reflexiones sobre la violencia*, México, Siglo XXI, Centro Reyna Sofía, pp. 11-33.

Scott, Joan W. 1999. "El género: una categoría útil para el análisis histórico" Marysa Navarro y Catherine R. Stimpson (Comps.) *Sexualidad, género y roles sexuales*, Buenos Aires: FCE, pp. 37-75.

Segato, Rita Laura. 2003. "Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia". *Estructuras elementales de la violencia*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, pp.131-148.

Shvedova, Nadezhda. 2002. "Obstáculos para la participación de la mujer en el parlamento" en Myriam Méndez Montalvo y Julie Ballington (Eds.) *Mujeres en el parlamento más allá de los números*. Estocolmo: IDEA, pp.63-84

Tarrés, María Luisa. 1998. "¿Importa el género en la política?" *Género y cultura en América Latina: cultura y participación política*, México: El Colegio de México, pp.13-32.

Varela Zuñiga, María del Rosario. 2012. "La violencia contra las mujeres en el ámbito de la esfera pública", Ponencia presentada en el Foro de Especialistas para Consolidar la Perspectiva de Género en la UAEM, Ixtapan de la Sal, México 11 y 12 de diciembre de 2012.

-----, 2010. “Representación política y agendas de género en los Congresos de Coahuila y Durango”, Tesis doctoral. México: El Colegio Mexiquense A.C.

Vianello, Mino y Elena Caramazza. 2002. Género, espacio y poder. Para una crítica de las Ciencias Políticas”. Madrid: Cátedra.

Zaikoski, Daniela. 2012. “Temas de mujeres y agenda pública. La perspectiva de género en el contenido de las propuestas legislativas en la cámara de diputados de la pampa”. Aljaba, vol.16, diciembre, Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján, pp.85-107.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Comisión Económica para América Latina. 2007. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Consenso de Quito. Quito: ONU <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf> (consultado el 21 de septiembre de 2014).

Johnson, Niki. 2013. “The role of cross-party parliamentary women's benches in promoting women's substantive representation: the case of the Uruguayan Bancada Bicameral Femenina”. Barcelona: Ponencia preparada para la Conferencia Europea en Política y Género Universitat Pompeu Fabre.

http://www.ecpg-barcelona.com/sites/default/files/ECPG2013_NJohnson_BancadaBicameralFemenina-Uruguay.pdf (consultado el 21 de septiembre de 2013).

-----, 2006. “Actuación parlamentaria y diferencias de género en Uruguay”. Política, núm. 46, Chile, Universidad de Chile, pp. 173-198.

López Padilla, Laura Inés. 2005. Municipales y municipalistas. La experiencia de la Red Nacional de Mujeres Municipales A.C. México: Instituto Griselda Alvarez A.C.

<http://www.griseldaalvarez.org/publicaciones/experiencia%20renamm.pdf> (consultado el 15 de enero de 2013)

Machicao Barbery, Ximena. 2011. “Participación política de las mujeres: acoso y violencia política”, ponencia presentada en el III Encuentro Latinoamericano de la REDLAMUGOL, ONU Mujeres, Quito.

<http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=15617&opcion=documento> consultado el 21 de septiembre de 2014

Organización de los Estados Americanos. 1994. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do Pará, Washington: OEA.

<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html> (consultado el 21 de septiembre de 2014).

Richard, Monique. 2011. La evolución de la participación de la mujer en las instancias políticas: balance y perspectivas futuras. Quebec: Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.

<http://www.feminamericas.net/ES/tematicas/documents/Rapp-partpol-e.pdf> (consultado el 2 marzo de 2014)

Soto, Paola. 2014. “El Avance político de las mujeres en México. Sistema electoral, lecciones, buenas prácticas y desafíos” Política UCAB, núm 33, Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello.

<http://politikaucab.net/2014/07/23/ponencia-de-paula-soto-el-avance-politico-de-las-mujeres-en-mexico/> (consultado el 5 de agosto de 2014).

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, PNUD y ONU Mujeres. 2012. Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/VIOLENCIA_CONTRA_LAS_MUJERES_web.pdf (consultado el 10 de enero de 2013).

LEGISLACIÓN

H. Congreso de la Unión. 2012. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Diario de debates. México.

<http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=33100> (consultado el 21 de septiembre de 2013)

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 2012. Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres de Bolivia, La Paz.

http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/7_2012/a35b825f-975b-4413-aedd-7590eed7da2b.pdf

PAGINAS ELECTRÓNICAS

Asociación de Concejalas de Bolivia. <http://www.acobol.org.bo/>

Organización de las Naciones Unidas. <http://www.un.org/es/>

Unión Interparlamentaria. <http://www.ipu.org>